



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-021-2021-00399-01 (O2-22-357)  
**Demandante:** AGUSTÍN ÁNGEL MARÍN MARTÍNEZ  
**Demandado:** AFP PORVENIR S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** AUTO INTERLOCUTORIO No.071 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022  
**Asunto:** EXCEPCIÓN PREVIA – INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA LITIS

En Medellín, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las magistradas **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, y el magistrado **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en su carácter de magistrado sustanciador, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de auto, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A. contra la decisión de negar la excepción previa de falta de integración de la litis, dentro del proceso ordinario instaurado por **AGUSTÍN ÁNGEL MARÍN MARTÍNEZ** en contra de **PORVENIR S.A.**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-021-2021-00399-01 (O2-22-357).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y una vez aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

### ANTECEDENTES

Mediante gestor judicial, AGUSTÍN ÁNGEL MARÍN MARTÍNEZ persigue el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de vejez desde el 22 de septiembre de 2018 y hasta el 1º de junio de 2021, los intereses moratorios o, en su defecto, la indexación, y las costas procesales, fundamentado en que nació el 22 de septiembre de 1956, por lo que cumplió 62 años de edad el mismo día de 2018; que efectuó su última cotización en pensiones en enero de 2016 e inició el trámite del bono pensional el 6 de marzo de 2018, firmando su historia laboral para bono pensional el 12 de octubre de 2018 ante la AFP demandada; que el 28 de febrero de 2019 solicitó a la AFP información sobre el estado del trámite de su pensión, ante lo cual el 14 de abril de 2019 la AFP le informó que su solicitud pensional estaba en trámite; que el 20 de

octubre, el 10 y el 23 de noviembre de 2020 solicitó a la AFP le informara si el bono pensional ya se encontraba en su cuenta de ahorro individual y si ya podía radicar los papeles definitivos de su pensión; petitorios que no fueron contestados, por lo que instauró acción de tutela; que radicó los papeles definitivos para el reconocimiento de su pensión de vejez el 5 de enero de 2021; que el 20 de enero de 2021 la AFP le informó que había concluido el trámite de reconstrucción de la historia laboral y el 10 de marzo de 2021 procedió a aprobarla con su firma; que el 28 de mayo y el 30 de junio de 2021 solicitó nuevamente su pensión de vejez a la AFP, la que fue concedida a partir del 1º de junio de 2021; y que el 9 de julio de 2021 solicitó a la AFP el reconocimiento y pago del retroactivo pensional y los intereses moratorios.

La demanda fue admitida por auto del 25 de noviembre de 2021 (doc. 02), y una vez notificada (doc. 04), fue contestada a través de poderhabiente judicial por PORVENIR S.A. (doc. 05), quien se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que en el RAIS la edad y las semanas de cotización no son los factores legales relevantes a tener en consideración a efectos del reconocimiento o no de una pensión de vejez, puesto que para el reconocimiento y pago de esa prestación se valora es el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, y es por ello que con el propósito de completar el capital que habría de financiar su pensión, se hizo necesario adelantar los trámites ante las entidades territoriales obligadas a pagar bono pensional a que el actor tenía derecho y así poder determinar si acumulaba o no el capital necesario para tal propósito: uno a cargo del Municipio de Remedios, por valor de \$5.556.935 y otro de parte del Municipio de Yolombó por valor de \$1.540.573, los cuales, para el momento en que el señor Marín solicitó el reconocimiento pensional, no habían sido redimidos por partes de esos entes territoriales, de forma tal que el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual no era suficiente para financiar la pensión de vejez que reclamaba, pero en aras de salvaguardar el mínimo vital del accionante, transitoriamente se tramitó el reconocimiento y pago de la garantía de la pensión mínima ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, luego de lo cual comenzó con el pago de la mesada a partir de junio de 2021, aún antes de recibir la resolución aprobatoria de la Garantía de Pensión Mínima por parte de la Oficina de Bonos Pensionales. Concluyendo con que no puede endilgarse a Porvenir demora en el trámite y resolución de la solicitud pensional de actor, por cuanto el reconocimiento de una pensión de vejez en favor del afiliado, bien sea normal o a través de la GPM depende, en buena parte, de la actividad del mismo demandante, a más de la de las entidades obligadas al pago de los bonos pensionales a que pueda haber lugar y de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En su defensa, propuso la excepción previa de *"Falta de integración de la litis consorcio necesaria, por pasiva, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales"*, con fundamento en que dicha entidad aprueba y autoriza el reconocimiento

de la Garantía Estatal de Pensión Mínima de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, de forma tal que es la que debe responder desde el punto de vista económico ante el demandante por la fecha del reconocimiento de la Garantía de Pensión Mínima, al tiempo que debe ser condenada al pago del dinero que deba restituirse para completar el capital que habrá de financiar la pensión de vejez del demandante.

En respaldo de su postura opugnadora, propuso las excepciones de mérito que rotuló: inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, y falta de causa para pedir.

En la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y de la SS del 20 de septiembre de 2022 (docs. 10 y 11), el *a quo* resolvió denegar la excepción previa de falta de integración de la litis, con apoyatura en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya aprobó y autorizó el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima, y que quien debe cumplir la condena es la AFP con cargo a la cuenta de ahorro individual o al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, y no dicha cartera ministerial, gravando en costas procesales a la AFP a favor del demandante.

Decisión que fue recurrida en reposición y en subsidio apelación por el apoderado judicial de PORVENIR S.A., tras estimar que en el *sub lite* no se discute el reconocimiento y pago de la garantía de la pensión mínima, pues efectivamente la misma ya se está pagando al accionante, sino que se discute es el retroactivo pensional, lo que implicaría la destinación de recursos por parte de la Oficina de Bonos Pensionales. Explica que la garantía de pensión mínima, si bien se puede comenzar a pagar con recursos de la cuenta de ahorro individual, tiene un componente de recursos estatales, los que se afectarían si se reconoce un retroactivo pensional, pues obviamente la garantía de pensión mínima ya deberá financiar más años, al haber menos dinero en la cuenta de ahorro individual debido al pago del retroactivo pensional pretense. Finalmente, aduce que el posible reconocimiento y pago de la pensión se debió a la necesaria constitución previa de los bonos pensionales, que también están a cargo del ministerio del ramo en cita, que fue el que retrasó su pago.

El *a quo* resolvió no conceder la reposición, con los mismos argumentos que fundamentaron el rechazo de la excepción previa, y en subsidio concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

## ANÁLISIS DE LA SALA

Frente al meollo del asunto planteado, cumple advertir que en términos del artículo 65 del estatuto adjetivo laboral, consagratorio de la procedencia del recurso de apelación contra los autos proferidos en primera instancia, en su numeral 3° señala que es apelable el auto "(...) que decida sobre excepciones previas."

En orden a resolver de fondo el asunto, la Sala observa que en el caso sub examine, ha de seguirse las previsiones contenidas en el artículo 61 del C.G.P., aplicable al proceso laboral por remisión analógica del artículo 145 del estatuto instrumental laboral, cuyo texto es del siguiente tenor:

***"LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO.*** Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos a tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas."

Ahora, para resolver el asunto, viene a propósito traer a colación lo delineado por el Consejo de Estado, como en la sentencia con radicación n.º 50422-23-31-000-1994-0467-01, del 13 de mayo de 2004, en donde asentó de manera diáfana:

*"a) hay relaciones jurídicas sustanciales o pretensiones respecto de las cuales, ya por su propia índole o por mandato de la ley, no es posible hacer un pronunciamiento judicial de mérito sin la comparecencia plena de las personas que son sujetos de ellas, toda vez que la sentencia debe comprenderlas a todas y de manera uniforme; se configura de ese modo un litisconsorcio necesario, que se denomina por activa si tal la pluralidad se hace imperativa en la parte demandante, o por pasiva si lo es en la parte demandada".*

Bajo los anteriores parámetros, tenemos que en el sub examine el demandante pretende el reconocimiento de unas mesadas pensionales de forma retroactiva, haciendo efectiva la garantía de pensión mínima dentro del RAIS, e intereses moratorios.

En orden a lo anterior, se advierte que la garantía de pensión mínima en el Régimen de Ahorro Individual, se encuentra consagrada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que *ad litteram* señala:

*"...Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del*

*principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión."*

Luego, el artículo 4° del Decreto 832 de 1996 reglamentó el artículo 65 de Ley 100 de 1993, puntualizando que "(...) *Corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las cuales, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les corresponde adelantar los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima (...)*".

Por consiguiente, todos los trámites para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, deben correr a cargo de la administradora de pensiones a la cual se encuentre afiliado el solicitante, y que es ante dicha administradora que ha de hacerse la solicitud.

Ahora, en cuanto a quién debe pagar la pensión, se tiene que el artículo 2 del Decreto 142 de 2006, que modificó el inciso 2° del artículo 9° del Decreto 832 de 1996, expresamente define que la AFP "(...) *iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual, previo reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del derecho a la garantía de pensión mínima, reconocimiento que se efectuará en un plazo no superior a cuatro (4) meses contados a partir del recibo de la solicitud. En estos casos, la AFP informará a la OBP cuando el saldo de la cuenta individual indique que se agotará en un plazo de un año, con el fin de que tome oportunamente las medidas tendientes a disponer los recursos necesarios para continuar el pago con cargo a dicha garantía (...)*" (subrayas de la Sala).

De las preceptiva en cita, educa la Sala que en el RAIS la garantía de pensión mínima se reconoce a quienes (i) arriben a la edad mínima exigida, (ii) cuenten con 1150 semanas de cotización, y (iii) acrediten que el capital existente en su cuenta de ahorro individual (CAI) no sea suficiente para financiar su pensión de vejez.

En paralelo, se desprende que está a cargo de la AFP los trámites pertinentes ante la OBP del Ministerio de Hacienda tendientes al reconocimiento y pago de aquella, así como el pago oportuno al beneficiario de la mesada pensional con cargo al capital obrante en la CAI, el cual se adicionará oportunamente por el Estado antes de su agotamiento, de modo que, el pensionado pueda disfrutar de su prestación sin rémora alguna.

Visto lo anterior y descendiendo al *sub lite*, se tiene que la misma AFP verificó que el capital existente en la cuenta de ahorro individual del demandante no es suficiente para financiar

una pensión de vejez, y por ello procedió a reconocer y pagar la garantía de pensión mínima de vejez estipulada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 con cargo a los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante (doc. 01 pág. 46 y 48), pero debiendo igualmente la AFP adelantar el trámite administrativo correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que dicha entidad asuma el pago de la prestación un año antes de que se extingan los recursos de la cuenta de ahorro individual, tal y como dispone el Decreto 142 de 2006 y según lo indica el precedente judicial en la sentencia SL4252-2021, en la cual se asienta que:

*"(...) una vez comprobada la existencia de los supuestos señalados, corresponde a la AFP elevar la solicitud de reconocimiento ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - OBP-, (...) (Artículo 4o del Decreto 833 de 1996 y Artículo 11 Decreto 4712 de 2008), (...) para que proceda la garantía de pensión mínima (Cálculo para la Garantía) (...) esto es, que la OBP emita resolución de reconocimiento de la garantía, la administradora queda obligada a efectuar el reconocimiento de la pensión vitalicia de vejez en cuantía de salario mínimo y en la modalidad de retiro programado."*

Ello así, ha de precisarse en este punto, que según los artículos 1 y 7 del Decreto 832 de 1996, *"la Nación y los dos regímenes del Sistema General de Pensiones garantizan a sus afiliados (...) el reconocimiento y pago de una pensión mínima de vejez"*, la cual inicialmente se paga con los recursos de la cuenta de ahorro individual, pero cuando éstos se agoten se financiará: *"con las sumas mensuales adicionales a cargo de la Nación"*, siendo que efectivamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe acudir a financiar la pensión de garantía mínima inicialmente pagada por la AFP, esto es, que se trata de una prestación económica que termina financiándose con recursos provenientes del presupuesto general de la Nación.

A partir de lo expuesto, se tiene que, en el *sub lite* si bien la AFP es la encargada de iniciar con el pago de la pensión de vejez por garantía mínima del demandante, ello se hace con cargo a los recursos obrantes en la cuenta de ahorro individual del pretensor, luego de lo cual ciertamente LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a través de su Oficina de Bonos Pensionales, es la encargada de financiar el pago de las mesadas pensionales del demandante.

Pues bien, de lo anterior, refulge palmar que en el *sub studium*, de prosperar la pretensión de retroactivo pensional, las mesadas pensionales retroactivas se financiarían con cargo a la cuenta de ahorro individual del accionante, lo que de suyo disminuirá el capital disponible en tal cuenta para sufragar sus futuras mesadas pensionales, y esto a su vez implicaría necesariamente que la Nación deba asumir más prontamente el pago de la mesada pensional, ante la disminución del capital destinado a su financiación.

Conforme lo expuesto, el proceso de marras versa sobre una relación jurídica respecto de la cual no es posible resolver de mérito sin la comparecencia de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en tanto que este interviene en los actos de financiación, reconocimiento y pago de la pensión de vejez por garantía mínima del RAIS, la que está sujeta a continuar con el pago de las mesadas pensionales una vez se agoten los recursos de la cuenta de ahorro individual.

En otras palabras, se probó que la pretensión principal *sub litium* de reconocimiento y pago de un retroactivo pensional de una pensión de vejez por garantía mínima, indefectiblemente afectaría a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, quien en caso de prosperar la demanda, deberá asumir en el futuro el pago de más mesadas pensionales que las que debería asumir si la demanda no prospera, por manera que no es posible hacer un pronunciamiento judicial de mérito sin la comparecencia la entidad pública que vería afectado su patrimonio con una eventual sentencia condenatoria, relación jurídica sustancial que no podría definirse sin la comparecencia de la cartera de dicho ramo, constituyéndose de ese modo un litisconsorcio necesario por pasiva.

Corolario de lo indicado, a pesar de que la demanda se formuló únicamente contra la AFP PORVENIR S.A., a la luz de lo dispuesto en el artículo 61 del C.G.P. debía formularse también contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en razón de lo cual se deberá revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar, declarar probada la excepción de indebida integración de la litis, propuesta oportunamente por la sociedad demandada, para vincular a la entidad pública referida en su carácter de litisconsorte necesaria por pasiva.

Sin costas en esta instancia, toda vez que el recurso de apelación propuesto por PORVENIR S.A. resultó avante. Las de primera instancia se revocan, y serán asumidas por la parte actora y a favor de PORVENIR S.A., por resultarle desfavorable la decisión de la excepción previa propuesta por la demandada, a voces del inciso final del numeral 1 del artículo 365 del CGP, correspondiéndole al *a quo* su tasación.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** REVOCAR la decisión materia de apelación proferida el 20 de septiembre de 2022, por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto declaró no probada la excepción previa de falta de integración de la litis, para en su lugar, **DECLARARLA** probada y en consecuencia, ORDENAR la vinculación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en calidad de litisconsorte necesaria por activa.

**SEGUNDO:** SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera instancia se REVOCAN, y serán asumidas por AGUSTÍN ÁNGEL MARÍN MARTÍNEZ y a favor de PORVENIR S.A., tásense.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario



**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los  
**ESTADOS No.224**, fijados en la secretaría del  
Tribunal, hoy **13 de diciembre de 2022** a las  
08:00am, los cuales pueden ser consultados en  
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

**RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS**  
Secretario